



RESEÑA LEGISLATIVA

ANÁLISIS, COMENTARIOS Y OPINIÓN DE LYD A PROYECTOS DE LEY INGRESADOS AL CONGRESO

SISTEMA DE
INTELIGENCIA DEL
ESTADO

BOLETÍN 12234-02

RESEÑA LEGISLATIVA
es una publicación de LIBERTAD Y DESARROLLO

DIRECTOR RESPONSABLE:

Luis Larraín A.

EDITOR: Pablo Kangiser G.

DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago, Chile.

1365
3 ENERO 2019

RESEÑA LEGISLATIVA

ANÁLISIS, COMENTARIOS Y OPINIÓN DE LYD A PROYECTOS DE LEY INGRESADOS AL CONGRESO

1365

3 ENERO 2019

SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO

BOLETÍN 12234-02

ÍNDICE

I DESCRIPCIÓN	3
II OPINIÓN EJECUTIVA	4
III CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	5
IV COMENTARIOS DE MÉRITO	7
VI HIPERVÍNCULO AL PROYECTO DE LEY	18

I DESCRIPCIÓN

BOLETÍN 12234-02

SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO

REFERENCIA

Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado

INICIATIVA

Mensaje presidencial

ORIGEN

Senado

MINISTERIOS

De Interior y Seguridad Pública, de Hacienda, de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos

INGRESO

13 de noviembre de 2018

ARTICULADO

Un artículo permanente y uno transitorio; el artículo permanente introduce modificaciones a la Ley N° 19.974, en relación a sus artículos 2°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10, 12, 15, 20, 21, 22, 27 y 37; e incorpora los nuevos artículos 6° bis, 6° ter, 15 bis, 22 bis, 37 bis, 44 bis y 44 ter.

II OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

SISTEMA DE
INTELIGENCIA DEL
ESTADO

**UN SISTEMA DE
INTELIGENCIA NACIONAL,
CORRECTAMENTE REGULADO
POR LEY, ES UNA CONDICIÓN
INDISPENSABLE PARA
LOGRAR LA ESTABILIDAD DEL
RÉGIMEN DEMOCRÁTICO
DE GOBIERNO. EN EFECTO,
LA INTELIGENCIA, EN
CUANTO RECOPIACIÓN
Y SISTEMATIZACIÓN DE
DATOS, PERMITE PREVER
LAS ÁREAS DE CONFLICTO
TANTO INTERNO COMO
EXTERNO, Y ADOPTAR
OPORTUNAMENTE MEDIDAS
PARA NEUTRALIZARLOS.**

Uno de los ejes centrales del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública (el “Acuerdo”) fue el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado (“SIE”), contemplándose como medida imperativa su reformulación en cuanto a su organización y funcionamiento para avanzar hacia un sistema moderno, integrado y funcional. Conforme al Acuerdo, la presente estructuración del SIE no responde a las necesidades actuales, por lo que resulta imperativo avanzar hacia un sistema que permita una acción preventiva eficaz ante nuevas amenazas de seguridad internas y externas. El proyecto de ley objeto de análisis recoge las propuestas del Acuerdo y modifica la legislación vigente, disponiendo la creación de un Consejo Asesor de Inteligencia, cuya finalidad será asesorar directamente al Presidente de la República en materias de inteligencia, para lo cual se reunirá, al menos, semestralmente. Asimismo, el proyecto potencia la actual Agencia Nacional de Inteligencia (“ANI”), asignándole nuevas funciones y creando el cargo de Subdirector, y diseña una nueva estrategia nacional que contendrá los objetivos del Estado respecto a inteligencia, entre otras modificaciones.

Un sistema de inteligencia nacional, correctamente regulado por ley, es una condición indispensable para lograr la estabilidad del régimen democrático de gobierno. En efecto, la inteligencia, en cuanto recopilación y sistematización de datos, permite prever las áreas de conflicto tanto interno como externo, y adoptar oportunamente medidas para neutralizarlos.

Es interesante que el sistema político haya podido finalmente superar la identificación entre “inteligencia” y “represión” que, tanto desde organismos históricos extranjeros como internos, dejó una huella de excesos, además de graves abusos, en el cumplimiento de sus funciones.

III CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO

Las principales modificaciones dicen relación con las siguientes materias:

- 1.** Se incorporan -en las mismas condiciones que los demás organismos que ya integran el Sistema Nacional de Inteligencia- los departamentos o unidades de inteligencia de Gendarmería y de Aduanas.
- 2.** La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) formarán parte del Sistema para el solo efecto de aportar información o análisis de inteligencia.
- 3.** Se crea un Consejo Asesor de Inteligencia, de carácter permanente y consultivo, que tendrá como objetivo informar y asesorar al Presidente de la República, mediante reuniones semestrales, sobre materias que sean propias del Sistema. Estará integrado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Defensa Nacional, el Subsecretario del Interior, y por las jefaturas de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, de las Direcciones de Inteligencia de las FF.AA., y de las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Carabineros y PDI).
- 4.** Habrá una Estrategia Nacional de Inteligencia, elaborada cada cuatro años por el Director de la ANI, con

SE CREA UN CONSEJO ASESOR DE INTELIGENCIA, DE CARÁCTER PERMANENTE Y CONSULTIVO, QUE TENDRÁ COMO OBJETIVO INFORMAR Y ASESORAR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE REUNIONES SEMESTRALES, SOBRE MATERIAS QUE SEAN PROPIAS DEL SISTEMA

el acuerdo del Ministro del Interior y Seguridad Pública y del de Defensa, que se someterá para su aprobación al Presidente de la República.

5.a. Se le agrega a la ANI la función de elaborar, con la colaboración del Comité de Inteligencia del Estado (que es una instancia de coordinación técnica entre los organismos del Sistema) la planificación de inteligencia del Estado, de carácter secreta, para el conocimiento y aprobación del Presidente de la República.

5.b. Se le agrega también la función de disponer la aplicación de medidas de inteligencia, con el objeto de detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, y de organizaciones criminales transnacionales; así como disponer la aplicación de medidas de contrainteligencia,

con el propósito de detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades de inteligencia desarrolladas por grupos nacionales o extranjeros.

6. Los organismos que forman parte del Sistema deberán contar con planes de capacitación, que permitan una formación común y coordinada entre ellos.

7. Se crea el cargo de Subdirector de la ANI.

8. Se faculta al Director de la ANI para establecer la organización interna del organismo y determinar las denominaciones y funciones de cada unidad, dentro del marco de la ley y de la dotación máxima de personal.

9. En el ámbito de las FF.AA., los objetivos de inteligencia militar serán fijados por las respectivas comandancias en jefe, y por el Estado Mayor Conjunto, en su caso.

10. En el caso de Carabineros e Investigaciones, los respectivos mandos superiores fijarán los objetivos de inteligencia policial, de acuerdo con los criterios de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior, establecidos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

11. Los diputados miembros de la Comisión Especial de Seguridad podrán citar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, al Director de la ANI para que informe respecto de la gestión del Servicio y el funcionamiento del Sistema. Además, se presentará semestralmente -hoy día es anualmente- un informe secreto a la misma Comisión, ante la cual, además, deberá informar en sesión secreta.

12.a. En materia de control y fiscalización, se establecen delitos específicos de falsedad en la información, sancionados con pena de 5 años y un día a 15 años, además de inhabilitaciones para cargos públicos.

12.b. También se sanciona, con similar pena, al diputado o senador que viole el deber de guardar secreto.

EN MATERIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN, SE ESTABLECEN DELITOS ESPECÍFICOS DE FALSEDAD EN LA INFORMACIÓN, SANCIONADOS CON PENA DE 5 AÑOS Y UN DÍA A 15 AÑOS, ADEMÁS DE INHABILITACIONES PARA CARGOS PÚBLICOS.

12.c. Se establecen, asimismo, mecanismos de control y fiscalización a nivel administrativo respecto de los personales que se desempeñen en labores de inteligencia, en cuanto al cumplimiento de sus funciones y obligaciones.

IV COMENTARIOS DE MÉRITO

SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO

Dando el enfoque más amplio posible al concepto de inteligencia, podemos relacionarlo con el proceso de obtención de datos, técnicamente sistematizados y orientados a la toma de determinadas decisiones de interés público o privado.

En efecto, en el ámbito privado empresarial existe una forma embrionaria de inteligencia orientada al conocimiento del mercado, a través de marketing o mercadeo, que permite conocer las preferencias de los consumidores, las expectativas de potenciales clientes, así como los recursos de la competencia, además de aspectos del comercio exterior que podrían incidir en el mercado interno, como una importación masiva de ciertos productos o, por el contrario, la posibilidad de abrir nuevos mercados en otros países.

En el ámbito público, que es donde el concepto adquiere toda su relevancia y al cual se remite el proyecto de ley en estudio, la inteligencia es sinónimo de poder, desde el momento que se ha aceptado como una premisa general que la información es una forma de poder (se habla de la sociedad de la información), y probablemente esta es una de las formas de poder que debe considerarse de mayor legitimidad, en el entendido que se cumpla con la legislación y regulación vigente al efecto y con criterios de prudencia y ética en la actuación de sus agentes, especialmente en el proceso de la obtención de datos.

La actitud ética es esencial para validar la actividad de los organismos de inteligencia. Otros sectores de la sociedad también podrían -y de hecho los delincuentes lo hacen- recopilar información sobre lugares donde a ciertas horas o bajo ciertas circunstancias se puede llevar a cabo un robo. Otros grupos de carácter subversivo también podrían utilizar métodos de inteligencia para sus propósitos de destruir el entramado social, económico y democrático de la sociedad.

Si bien la inteligencia y la contrainteligencia parecen haber nacido y haberse desarrollado en el mundo militar, a veces en forma exclusiva, lo cierto es que actualmente ya no es así, pues ahora se trata de una función asignada de pleno al Estado, sin perjuicio de la actividad propia de las FF.AA., las que, sin embargo, deben integrar el sistema estatal y con un importante grado de subordinación a ese sistema. En suma, podemos señalar que el SIE es el conjunto de organismos de inteligencia, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia (recolección y análisis de información útil para la toma de decisiones) y contrainteligencia (detección y neutralización de acciones de inteligencia de otros Estados, personas o grupos contra la seguridad del Estado), para asesorar al Presidente de la República y a los niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional ¹.

1. Artículo 2°, letras a) y b) y artículo 4° de la Ley N° 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia.

Principios

La doctrina ha definido algunos principios que deberían informar un sistema de inteligencia del Estado, que a continuación se resumen²:

a. Integralidad: el sistema nacional debe ser global y abarcar todas las actividades que se desarrollan al interior del país, de cualquier naturaleza que sean.

b. Permanencia: se trata de una actividad permanente del Estado, independiente de las autoridades de turno y cualesquiera fueren las amenazas o conflictos latentes. Pero no se debe confundir permanencia con una situación estática, pues se trata de una actividad esencialmente dinámica.

c. Unidad de concepción y de dirección: el sistema debe tener una sola concepción y dirección, que provea una dinámica de conjunto, cualesquiera fueren los organismos que lo integren. La autoridad debe estar en el más alto nivel de conducción del Estado, y según esta opinión (Holzmann), dicha autoridad se debe radicar en un organismo colegiado.

d. Ejecución descentralizada: bajo un órgano coordinador eficiente, la mejor optimización se logra descentralizando la acción de los diversos organismos operativos, tanto civiles como militares, los cuales no deben poder autodefinir su misión, ya que ello resulta contraproducente y podría interferir en la esfera de atribuciones de otros organismos. La descentralización incide también en la especialización y, consecuentemente, en una mayor eficiencia en la obtención de información.

e. Flexibilidad: la rigidez se opone a la eficiente operatoria de cualquier sistema de inteligencia, pues éste debe ser paulatinamente adaptado a los tipos de amenazas o necesidades de información que el poder central requiera, según las circunstancias; y así debe poder adaptarse al

diseño que el Estado pueda adoptar en diversas épocas o circunstancias. Es decir, la función de inteligencia es esencialmente dinámica.

Complementariamente, sin embargo, y desde un punto de vista centrado en los derechos de las personas, cabe agregar que los principios recién enunciados deben entenderse dentro de un marco jurídico que resguarde las garantías constitucionales, especialmente la vida privada, la inviolabilidad del hogar, el derecho a la libertad personal, y principalmente, el debido proceso cuando los antecedentes recopilados por organismos de inteligencia pudieran llegar a ser presentados en los tribunales de justicia en contra de un imputado (artículo 19 N°s 3, 4, 5 y 7 de la Constitución Política).

Otros aspectos generales

Tanto en lo que concierne a la lucha contra la delincuencia, como a la defensa frente al terrorismo o frente a amenazas externas, la inteligencia es un instrumento que no requiere del uso de la fuerza; es más, si se llega al uso de la fuerza, en el marco de la ley, la gestión de inteligencia pasa a segundo plano ya que ésta siempre deberá mantenerse en reserva. Tal reserva es una condición para que la operación de los organismos de inteligencia pueda cumplir cabalmente su función.

Desde otro punto de vista, la inteligencia es un elemento que interviene en la conservación de todo Estado democrático, en la medida que la democracia es un sistema que puede recibir ataques desde distintos ángulos y bajo diversas modalidades. No solo el terrorismo y la delincuencia, sino que también existen otras formas de atentar contra el orden establecido, y que se describen como delitos contra la seguridad exterior e interior y contra la soberanía del Estado en el Código Penal³, así como en la Ley N° 12.927 sobre seguridad del Estado. Sería incomprensible que las autoridades político administrativas no dispusieran de herramientas idóneas para precaver las alteraciones del orden público o las amenazas a la soberanía, así como

2. Holzmann P, Guillermo, Sistema de Inteligencia en el Estado Chileno: *Reflexiones acerca de su Función* (con abundante bibliografía) en <https://fas.org/irp/world/chile/holzmann.htm> (página web visitada en diciembre de 2018).

3. Título I del Libro Segundo del Código Penal.

TANTO EN LO QUE CONCIERNE A LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, COMO A LA DEFENSA FRENTE AL TERRORISMO O FRENTE A AMENAZAS EXTERNAS, LA INTELIGENCIA ES UN INSTRUMENTO QUE NO REQUIERE DEL USO DE LA FUERZA.

para procurar su neutralización. Para tales propósitos, es también necesario elaborar una planificación que organice el trabajo de inteligencia y especialmente de recopilación de datos y antecedentes, y que permita la coordinación entre los diversos organismos competentes. El M 15 (Secret Security Service) en el Reino Unido; el SISMI (Servicio para la Información y la Seguridad Militar) y el SISDE (Servicio para la Información y la Seguridad Democrática) ambos en Italia; la Dirección de Vigilancia del Territorio y la Dirección General de Seguridad Exterior en Francia, son ejemplos de organismos de esta naturaleza. También en Estados Unidos se observa que la CIA se ocupa de la seguridad exterior y el FBI, del ámbito interior.

Lo anterior hace pensar en que la función de inteligencia viene a ser un requisito de la gobernabilidad en un sistema democrático.

DESDE OTRO PUNTO DE VISTA, LA INTELIGENCIA ES UN ELEMENTO QUE INTERVIENE EN LA CONSERVACIÓN DE TODO ESTADO DEMOCRÁTICO, EN LA MEDIDA QUE LA DEMOCRACIA ES UN SISTEMA QUE PUEDE RECIBIR ATAQUES DESDE DISTINTOS ÁNGULOS Y BAJO DIVERSAS MODALIDADES.

Breve reseña de la situación en Chile

Hasta antes de la dictación de la Ley N° 19.212 de 30 de abril de 1993, que creó la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, la función de inteligencia estuvo radicada en el sector de las FF.AA. y de Orden y Seguridad Pública, esto es, en las respectivas Direcciones de Inteligencia, y en organismos de nivel superior y de coordinación dentro del mismo ámbito de la defensa. Esta adscripción de la inteligencia al ámbito castrense, unida a las experiencias de la KGB y otros organismos similares, como la GESTAPO en la Segunda Guerra Mundial, así como excesos ocurridos internamente en períodos de agitación política y respuesta autoritaria, hicieron que el sistema político instaurado a partir de 1990 desconfiara visceralmente de los organismos de inteligencia, término que quedó por entonces unido indefectiblemente a la represión.

Fue recién en el año 2004, cuando se dictó la Ley N° 19.974, que se comenzó a utilizar el término “inteligencia” en el vocabulario técnico de la ley y en su ámbito específico. Entonces se creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y se derogó la citada Ley N° 19.212, de 1993.

Principales lineamientos del proyecto de ley

Como se mencionó con anterioridad, el proyecto que ahora se comenta corresponde a una de las primeras iniciativas legales que materializan las propuestas del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública.

Conforme al Acuerdo, la presente estructuración del SIE no responde a las necesidades actuales, por lo que se consideró imperativo avanzar a un sistema que permita una acción preventiva eficaz ante nuevas amenazas de seguridad internas y externas. Se propuso crear un Consejo Nacional de Inteligencia que asesore directamente al Presidente, incorporar al Servicio Nacional de Aduanas y a Gendarmería y, solo para fines de inteligencia estratégica, a la Unidad de Análisis Financiero y al SII. Además, se propuso, entre otras cosas, reforzar las responsabilidades de los integrantes respecto a la cooperación en la entrega de información y en el resguardo del secreto. A

su vez, recomendó el diseño de una Estrategia Nacional de Inteligencia y la elaboración de un Plan Nacional de Inteligencia que estableciera objetivos y procedimientos concordantes con ella.

El proyecto de ley recogió todas las propuestas del Acuerdo, aunque algunas se presentan con ligeros matices, como, por ejemplo, que si bien se dispone la creación de un Consejo Asesor, éste no será presidido por el Presidente de la República, como se recomendaba. Si bien el proyecto no establece quién lo presidirá, pues esa materia queda entregada al reglamento, lo más probable es que sea presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública. A su vez, se mantiene el mandato para planificar la inteligencia del Estado, pero tendrá carácter secreto. Por su parte, para reforzar las responsabilidades, se incorporan sanciones administrativas, pero no penales⁴.

En síntesis, el proyecto de ley modifica diversos preceptos de la Ley N° 19.974 con el objeto de dar vigencia a un

EL PROYECTO DE LEY MODIFICA DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY N° 19.974 CON EL OBJETO DE DAR VIGENCIA A UN CONSEJO ASESOR DE INTELIGENCIA, HACER INTERVENIR A OTROS ORGANISMOS QUE PODRÍAN HACER APORTES, COMO ADUANAS Y GENDARMERÍA.

Consejo Asesor de Inteligencia, hacer intervenir a otros organismos que podrían hacer aportes, como Aduanas y Gendarmería, además del SII y la UAF (estos dos últimos solo para aportar análisis de inteligencia, en sus respectivos ámbitos de competencia). Además, potencia a la ANI y diseña una estrategia nacional, a la vez que se promueve la planificación de estas actividades.

Aspectos más específicos de estas proposiciones se incluyen a continuación.

PRECEPTOS DEL PROYECTO DE LEY

Artículo 2°.- Para los fines de esta ley y de las actividades reguladas por la misma, se entiende por:

a) Inteligencia: el proceso sistemático de **búsqueda, obtención**, recolección, evaluación, **integración** y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones.

Artículo 4°.- El Sistema de Inteligencia del Estado, en adelante el Sistema, es el conjunto de organismos de inteligencia, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de contribuir a proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales.

COMENTARIOS

Los términos destacados son los que se agregan en virtud del proyecto de ley. El resto viene del texto primitivo de la Ley N° 19.974.

Este artículo resume los aspectos más esenciales del sistema de inteligencia: integración y coordinación, y el otorgamiento de asesoría al más alto nivel, esto es, al Presidente de la República. Queda claramente establecido que el sistema de inteligencia no adopta decisiones que competen al poder político institucional; solo proporciona antecedentes sistematizados. Además, se indica expresamente el ámbito y finalidad de la inteligencia, y que en una palabra se puede resumir en gobernabilidad del sistema republicano.

4. Ver Tema Público N° 1380-2, 7 de diciembre 2018 (ISSN 0717-1528).

Artículo 5°.- El Sistema estará integrado por:

- a) la Agencia Nacional de Inteligencia;
- b) la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional;
- c) las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas;
- d) las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública;
- e) los departamentos o unidades de inteligencia de Gendarmería de Chile y del Servicio Nacional de Aduanas.

Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente.

Para el solo efecto de aportar información o análisis de inteligencia, formarán parte del Sistema, la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos. Dichos servicios estarán afectos a todas las obligaciones y deberes previstos en esta ley, principalmente aquellos relativos a la entrega y reserva de la información que pueda surgir del ámbito de su competencia legal.

Este artículo consagra la nueva estructura del sistema, con la incorporación de Gendarmería y Aduanas (nueva letra e), y la participación del Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero (nuevo inciso final).

Artículo 6° bis.- Créase un Consejo Asesor de Inteligencia, de carácter permanente y consultivo, que tendrá como objetivo informar y asesorar al Presidente de la República sobre materias que sean propias del Sistema.

Dicho Consejo estará integrado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Defensa Nacional, el Subsecretario del Interior y los jefes de los organismos señalados en el inciso primero del artículo 5°.

Este Consejo Asesor recuerda, en sus aspectos centrales, al Comité Consultivo del año 1993:

Artículo 5°.- Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 2°, se establece un Comité Consultivo de Inteligencia.

El Comité Consultivo estará integrado por el Ministro del Interior, que lo presidirá; el Subsecretario del Interior; un Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, designado por el titular de esa Secretaría

El Consejo deberá reunirse con el Presidente de la República al menos semestralmente. Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente de la República podrá convocar sesiones extraordinarias cuando así lo estime necesario.

Un decreto supremo determinará las normas relativas al funcionamiento del Consejo

de Estado, quien actuará en su representación; el Subsecretario de Relaciones Exteriores; el Director de Seguridad Pública e Informaciones; el Subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; los Jefes de Inteligencia de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, y los Jefes de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Actuará como Secretario del Comité, el Jefe de la División de Análisis y Planificación de la Dirección y, en su defecto, el Jefe de la División de Coordinación.

A las reuniones del Comité podrán asistir las autoridades o funcionarios de la Administración del Estado cuya concurrencia sea solicitada por el Ministro del Interior (artículo 5° de la ley 19.212, de 1993).

Artículo 6° ter.- El Director de la Agencia Nacional de Inteligencia elaborará, con la aquiescencia del Ministro del Interior y Seguridad Pública y del Ministro de Defensa Nacional, cada cuatro años, una Estrategia Nacional de Inteligencia, en la que se fijarán los objetivos estratégicos y los resultados perseguidos por el Estado en materia de inteligencia.

La Estrategia Nacional de Inteligencia deberá ser aprobada por el Presidente de la República.

La consagración de una estrategia nacional de inteligencia viene a ser un aspecto insoslayable en el sistema regulado por ley.

Sin embargo, su contenido específico o de detalle debería quedar dentro del ámbito reservado, pues de lo contrario se podría malograr su finalidad.

Artículo 8°.- Corresponderán a la Agencia Nacional de Inteligencia, en adelante la Agencia, las siguientes funciones:

- a) Recolectar y procesar información de todos los ámbitos del nivel nacional e internacional, con el fin de producir inteligencia y de efectuar apreciaciones globales y sectoriales, de acuerdo con los requerimientos efectuados por el Presidente de la República.
- b) Elaborar informes periódicos de inteligencia, de carácter secreto, que se remitirán al Presidente de la República y a los ministerios u organismos que él determine.
- c) Proponer normas y procedimientos de protección de los sistemas de información crítica del Estado.

Este artículo define el ámbito de competencia de la ANI, agregando ahora la elaboración de la planificación de inteligencia, de carácter secreto, norma que, de conformidad con el artículo 8°, inciso segundo de la Constitución Política, es de quórum calificado.

d) Elaborar, con la colaboración del Comité de Inteligencia del Estado, la planificación de inteligencia del Estado, de carácter secreta, para el conocimiento y aprobación del Presidente de la República.

e) Disponer la aplicación de medidas de inteligencia, con objeto de detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, y de organizaciones criminales transnacionales.

f) Disponer la aplicación de medidas de contrainteligencia, con el propósito de detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades de inteligencia desarrolladas por grupos nacionales o extranjeros, o sus agentes, excluyendo las del **inciso segundo del artículo 20**.

Inciso segundo del artículo 20: (La inteligencia Militar) comprende la inteligencia y la contrainteligencia necesaria para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional. Excepcionalmente, dentro de las funciones de policía que le corresponden a la autoridad marítima y a la aeronáutica, la inteligencia naval y la aérea podrán realizar el procesamiento de información de carácter policial que recaben.

Artículo 15.- Fíjase la siguiente planta del personal para la Agencia:

Cargos	Grado N°
Director	1C 1
1 Subdirector	2
(...).	

Es positiva la creación del cargo de Subdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, dadas las mayores atribuciones que se otorgan al organismo.

Nuevo inciso final del artículo 15:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero (Planta del Personal), el Director de la Agencia Nacional, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.

La flexibilidad que se otorga a la ANI mediante esta nueva norma es consistente con la necesidad de adaptación del organismo. La flexibilidad es uno de los principios que deben regir el sistema de inteligencia, con el objeto de ir adecuándose a los requerimientos que surjan de la evolución natural de las instituciones del país, así como de peligros que pueden fraguarse desde el extranjero.

Por lo anterior, debe entenderse que la facultad antedicha es permanente y no se agota con el ejercicio por parte de un Director, sino que se permite que éste, prudentemente y frente a nuevos desafíos no previstos en años anteriores, pueda efectuar adecuaciones en la organización, así como por los Directores que asuman en el futuro.

PRECEPTOS DEL PROYECTO DE LEY

Nuevo artículo 15 bis:

Artículo 15 bis. Los organismos que formen parte del Sistema deberán contar con capacitaciones y planes de estudio destinados a asegurar una formación común y coordinada, y que sus funcionarios cuenten con las competencias necesarias en materia de recopilación y uso integrado de inteligencia.

Artículo 20, incluyendo las modificaciones que le introduce el proyecto de ley:

Artículo 20.- La inteligencia militar es una función que corresponde exclusivamente a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y a la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto .

Comprende la inteligencia y la contrainteligencia necesaria para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional. Excepcionalmente, dentro de las funciones de policía que le corresponden a la autoridad marítima y a la aeronáutica, la inteligencia naval y la aérea podrán realizar el procesamiento de información de carácter policial que recaben.

Asimismo, los servicios de inteligencia militar deberán aportar a la Agencia la información residual que obtengan en el cumplimiento de sus funciones. Para estos efectos, se entenderá por información residual toda aquella que diga relación con la seguridad interior del Estado.

La conducción de los servicios de inteligencia militar corresponde al mando superior de las instituciones de las cuales dependen; **los que velarán por el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en esta Ley, persiguiendo las responsabilidades administrativas y criminales cuando corresponda.**

COMENTARIOS

De esta nueva disposición y de su correcto ejercicio depende la posibilidad -y la necesidad- de que los distintos organismos que integran el sistema “conversen en el mismo idioma”. Este es otro de los principios que enunciamos anteriormente, esto es, la unidad de concepción y dirección, lo que supone un común denominador en todos los agentes involucrados.

Este artículo señala la zona limítrofe entre el sistema de inteligencia nacional y la inteligencia y contrainteligencia militares, las cuales se entiende que forman parte de aquel. La pregunta que necesariamente surge es por qué si se debiera establecer un sistema integrado, se crea una zona de exclusividad operativa para las FF.AA. Se echa de menos, por esta razón, una mayor coordinación entre el ámbito militar y el nacional. La única norma medianamente aclaratoria sobre este particular es la obligación de las FF.AA. de contribuir al sistema nacional con la “información residual”, definida como “toda aquella que diga relación con la seguridad interior del Estado”. Sería adecuado precisar este concepto, porque tal como está redactado, parece no ser suficientemente taxativo. En efecto, da a entender que existe información que interesa a las FF.AA. y no al sistema nacional, lo que viene a negar los principios de integridad y de unidad de dirección.

Es una materia de vital importancia que debería ser revisada o precisada.

Se destacan las modificaciones introducidas por el proyecto.

Nuevo artículo 21:

Artículo 21.- Los objetivos de la inteligencia militar de las Fuerzas Armadas y de la Dirección de Inteligencia de la Defensa, serán fijados por las comandancias en jefe y el Jefe del Estado Mayor Conjunto respectivamente, de acuerdo con los criterios de la política, planes y objetivos de inteligencia de la defensa nacional, establecidos por el Ministro de Defensa Nacional.

El artículo 21 hoy día vigente establece:

Artículo 21.- Los objetivos de la inteligencia militar de las Fuerzas Armadas serán fijados por las comandancias en jefe respectivas, de acuerdo con los criterios de la política de defensa nacional, establecidos por el Ministro de Defensa Nacional.

Los objetivos de la inteligencia militar de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional serán fijados por el Ministro de Defensa Nacional.

Comentario: esta norma, así como la que se viene proponiendo, refuerzan la situación planteada en el acápite anterior, respecto de la pérdida del factor integralidad y unidad de dirección que es deseable para el sistema de inteligencia nacional.

Nuevo artículo 22, con las modificaciones que se le introducen:

Artículo 22.- Los objetivos de la inteligencia policial de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile serán fijados por sus mandos superiores respectivos, de acuerdo con los criterios de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior, establecidos por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.

La inteligencia policial es una función que corresponde exclusivamente a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 20.

Comprende el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior.

Respecto de Carabineros e Investigaciones, se trata de una situación similar a la de las FF.AA.

PRECEPTOS DEL PROYECTO DE LEY

Nuevo artículo 22 bis:

Artículo 22 bis.- Los departamentos o unidades de inteligencia de Gendarmería de Chile y del Servicio Nacional de Aduanas, son organismos del Sistema que, sin formar parte de los servicios de inteligencia militar o policial, realizan labores de procesamiento de información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar la defensa nacional o el orden y la seguridad pública interior.

La conducción de los organismos señalados en el inciso anterior corresponde al jefe superior del respectivo Servicio.

Artículos 37 y 37 bis:

Artículo 37.- La Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones fiscalizadoras, constituirá, en conformidad a su Reglamento, una Comisión Especial que tendrá como competencia conocer los informes y antecedentes relativos a las actividades de los servicios y organismos que integran el Sistema de Inteligencia del Estado.

El Director de la Agencia Nacional de Inteligencia presentará semestralmente a dicha Comisión Especial, un informe secreto sobre la labor realizada por la Agencia y respecto del funcionamiento del Sistema.

Los informes y antecedentes a que se refieren los incisos precedentes, serán conocidos por esa Comisión en sesiones que tendrán el carácter de secretas.

(Nuevo) Los diputados miembros de la Comisión Especial, podrán por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio, citar al Director de la Agencia Nacional de Inteligencia para que informe respecto de la gestión del Servicio y el funcionamiento del Sistema.

COMENTARIOS

En este caso, distinto del anterior, los servicios de inteligencia de Gendarmería y Aduanas quedan expresamente integrados al sistema nacional, sin perjuicio de las atribuciones de los mandos institucionales, como se señala en el inciso final del artículo.

La relación entre el poder político, representado por la Cámara de Diputados y la Agencia Nacional de Inteligencia, viene regulada en los artículos 37 y 37 bis.

Los únicos cambios en el artículo 37 son el informe semestral en lugar de anual, que el Director de la ANI debe presentar a la Comisión Especial, y la facultad de los miembros de dicha Comisión para citar, por los dos tercios, al Director.

Respecto del carácter secreto, recuérdese que se trata de normas de quórum calificado, conforme al artículo 8° de la CPR.

Artículo 37 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia deberá informar semestralmente en sesión secreta a las comisiones unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública del Senado de la República, sobre el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Inteligencia.

Lo que es nuevo es la obligación del Director de la ANI de informar semestralmente a las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad Pública del Senado sobre el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Inteligencia.

De esta manera, ambas ramas del Congreso adquieren atribuciones en esta materia.

Sin embargo, debe recordarse que las facultades fiscalizadoras competen solo a la Cámara, por lo que la relación con una y otra rama del Congreso debiera tener un matiz diferente.

V HIPERVÍNCULO AL PROYECTO DE LEY

SISTEMA DE
INTELIGENCIA DEL
ESTADO

El proyecto puede verse en el siguiente hiper vínculo:

https://www.camara.cl/pley/pley_buscador.aspx?prmBuscar=12234